



ANTECEDENTES HISTORICOS DEL SEGURO ARGENTINO



OS antecedentes históricos del Seguro Argentino, constituyen un aspecto interesante de la historia económica del país.

Antes de entrar al tema, se hace necesario, sin embargo, formular algunas consideraciones referentes a la época colonial, con el fin de hilvanar mejor los conceptos de este trabajo, y encontrar en su raíz, el origen del seguro contemporáneo.

I

La organización económica del Río de la Plata, durante la época de la colonia, se caracterizó por una desmedida política de absorción emanada del gobierno central. La libertad no existía, y el derecho mercantil era una cosa *sui generis*, substanciada al paladar de los que tenían en sus manos los destinos coloniales. La libertad de comercio

estaba no sólo coartada de hecho, sino también por el espíritu y letra de la ley, que bajo un ridículo palabrerío, ponía en un brete todo principio de libertad. Esta manía monopolista, dió lugar a que se dictaran leyes que, como la famosa de libertad de imprenta, provocaron las más encarnizadas luchas y movieron a algunos espíritus peregrinos a hacerlas objeto de sus burlas.

El autor de *Le Mariage de Figaro* y de tantas otras obras interesantes ridiculizó esta costumbre de la España centralista en unos párrafos que luego dieron la vuelta al mundo. «Con tal que no se hable en sus escritos de la autoridad — decía — ni del culto, ni de la política, ni de la moral, ni de los otros espectáculos, ni de persona que se refiera a cosa alguna, se puede imprimir todo libremente «bajo la inspección de tres censores».

Y en esto no hay exageración, pues las leyes de aquellos tiempos, especialmente las que se referían al uso de la libertad, estaban redactadas sino en iguales, en muy parecidos términos.

Si las leyes internas de la Metrópoli eran coercitivas, es de figurarse cómo serían las que se redactaban para las colonias. En estos casos la supresión de la libertad era total. Júzguese sino por los siguientes párrafos, que tomo de una ley colonial referente a la libertad de comercio, la cual por sí sola basta para atestiguar la verdad de cuanto dejo dicho.

«Con tal que la mercancía sea española — dice la citada ley — y no sea de otra parte, que salga de puerto español «habilitado por ley, y vaya a puerto americano legalmente «habilitado; que vaya en navío habilitado especialmente, «y a cargo de persona habilitada para ese tráfico, previa «información de sangre, conducta, creencias, etc., es libre «el comercio de América según sus leyes.»

Esta burda parodia de derecho no era con todo cosa particular de España, pues la misma Inglaterra, cuna de

todas las libertades, no legislaba para sus colonias en forma más benévola. Basta recordar el Acta de Cromwell de 1651, que se mantuvo en vigor hasta mediados del siglo XIX y que contiene los principios del monopolio más severo, disponiendo que en adelante no podría entrar mercancía colonial sino en barco de pabellón inglés, equipado por un armador del país, mandado por un capitán de la misma nacionalidad, y cuya tripulación fuese británica a lo menos en sus tres cuartas partes.

La política inglesa fué más allá en putno a trabas y prohibiciones mercantiles, que la política española. Como se ve, era éste un mal de los tiempos, que desgraciadamente retrasó el progreso de las tierras de América en una cantidad considerable de años, y las colonias españolas fueron las mayormente perjudicadas por el imperio de estas modalidades. Pero con ser un régimen absurdo, fué igualmente aplicado por Francia, Portugal y Holanda con respecto a sus posesiones y de allí que estas costumbres se arraigaran tanto en la política colonial de Europa.

Bajo este régimen es lógico que no prosperaran las iniciativas individuales en favor de la implantación de nuevas industrias. Pues está probado que la falta de libertad, bajo el imperio del monopolio, tiende a paralizar el efecto derivado de toda actividad que proceda del exterior, como así también la que emana de los individuos o corporaciones que integran la misma comunidad. Y en las colonias de América la libertad era un mito. El comercio se efectuaba por mediación de España y con productos de España; todo se circunscribía a un juego en el que la concurrencia exterior o la iniciativa privada, no contaban para nada.

Y como — al decir de célebres pensadores y economistas — las libertades tienen por objeto pacificar, poblar y elevar la condición moral y material de los pueblos, es lógico suponer que la carencia de las mismas diera los resultados consiguientes.

La falta de libertad es una negación, no sólo del derecho individual, sino del derecho colectivo; y durante el imperio colonial las cosas se presentaban bajo este aspecto, no obstante el clamor de muchos escritores y economistas, que ya en el reinado de Fernando VI habían iniciado un movimiento de reacción contra estas prácticas, velando por la integridad de la corona de España.

Recién a mediados del siglo XVIII, época de Carlos III, de la dinastía de los Borbones, España se resuelve decididamente en contra de los prejuicios que caracterizaron su política económica hasta entonces. Reacciona en base a los estudios publicados por eminentes escritores y a la acción de sabios economistas, entre los que corresponde citar en primer término al genial Campomanes, uno de los hombres de confianza del rey, que supo reconocer ampliamente la importancia económica de las colonias americanas.

Carlos III inicia una ordenada revisión de los valores económicos, analiza las necesidades reales, apartándose de la presión de los favorecidos, escucha las opiniones de hombres versados en la materia y se decide a introducir fundamentales reformas en el comercio de América y demás colonias españolas. Sin embargo, el mal régimen anterior había dejado profundas huellas, a tal punto que el conde de Aranda, consejero del rey, anunció en 1785 su convencimiento «de que la América del Sud se perdería y propuso dividirla en reinos, cuya soberanía se daría a príncipes españoles bajo la hegemonía de España».

Un insigne economista, don Bernardo Ward, en 1760, y con anterioridad a la obra de Campomanes, había hecho ya un prolijo análisis de la situación del comercio de América y afirmaba que «por política económica en América debía entenderse una buena policía, el arreglo del comercio, el modo de emplear civilmente a los hombres, el de cultivar las tierras, mejorar sus frutos y en fin, todo aquello que conduce a sacar el mayor provecho y utilidad de una co-

lonia. Hemos establecido sin quererlo, decía, un sistema que ha aniquilado los intereses de España y que hoy no es tan fácil extirpar. Y finalizaba su proyecto económico sentando premisas como ésta: «Debemos mirar la libertad como el alma del comercio, sin la cual éste no puede florecer ni vivir.»

Otro eminente escritor, D. Gaspar Melchor de Jovellanos, escribía en materia económica con la misma empeñosa energía con que luchara por el régimen de la libertad individual: «Las razones en que acaba de fundarse la necesidad del libre comercio interior de nuestros frutos, concluyen también en favor de su comercio exterior y prueban que la libre exportación debe ser protegida por las leyes, como un derecho de la propiedad de la tierra y del trabajo y como un estímulo del interés individual. El mejor camino de conseguir la abundancia de los productos de la tierra y del trabajo, sean los que fueren, es estimular el interés individual por medio de la libertad de su tráfico».

Después de estas opiniones, a las que habría que añadir otras no menos interesantes como las de D. Antonio de Ulloa, de Larra, Uztariz y Costa, que trataron distintamente el comercio colonial, fácil resulta percibir las consecuencias derivadas de estas modalidades, que impidieron la implantación de muchas iniciativas que pudieron haber dado un impulso efectivo a estas colonias; entre esas iniciativas bien pudo figurar en forma inequívoca el Seguro Marítimo, que en España tuvo tan gran desarrollo, como lo demuestra el hecho de haberse dictado en Barcelona, en 1435, la primera Ordenanza sobre la materia, «dedicada a extirpar los fraudes, daños, discusiones y debates que podrían tener lugar en dicha ciudad con ocasión de los seguros sobre buques; mercancías, efectos y bienes y también en beneficio de los asegurados y aseguradores». Gay de Moniellá, autor del Tratado sobre Seguros Marítimos, afirma que «es de todo

punto de vista indiscutible que Barcelona fué la cuna de la primera Ordenanza en materia de Seguros Marítimos».

En efecto: si se analizan los documentos históricos de la legislación española, se encuentra que en el Breviario de Aniano figuran dos disposiciones importantes sobre derecho marítimo; una sobre la echazón (de facto) y otra sobre el préstamo a la gruesa (pecunia trajecticia), aun cuando en ellas no se formulan apreciaciones exactas y precisas acerca del Seguro.

En el *Fuero Juzgo*, en cambio, se hallan diversas leyes en el libro II, referentes al comercio, y en el *Fuero Real* existen leyes sobre el mismo punto que más tarde fueron reproducidas en las *Partidas*. En este Código se trata de las ferias y mercados, de sus franquicias y de la seguridad de los mercaderes (Título VII) y se constatan algunas leyes relativas al fletamento y al daño causado al cargamento y a los equipajes (Título VIII). Finalmente en el título IX se legisla sobre los capitanes o mayores, sobre los daños reputados como averías comunes, sobre los naufragios y de los que se apoderan del cargamento o restos del buque. Las leyes 5ª y otras del Título 24 (segunda parte) legislan sobre tópicos afines.

Pero donde se encuentra un antecedente de importancia es en la célebre *Recopilación de Indias*, la que demuestra palmariamente que el Seguro era una institución perfectamente conocida en estas colonias, por cuanto trata del tema con una amplitud notable. Desde luego, corresponde recordar que la *Recopilación de Indias* era un código especial redactado para la América Española, cuyo objeto primordial fué reglar el derecho marítimo y mercantil.

En el libro IX se encierran preciosas y sabias disposiciones sobre los buques y la navegación, y una bastante completa legislación sobre Seguros Marítimos, muy importante para su época, la que fué sancionada en 1556 por Felipe II.

De todas estas leyes que concuerdan en su fondo con gran parte de las disposiciones de nuestro código, se destaca una particularidad originalísima, cuanto lo revela la obligación de adoptar lo que hoy día conocemos con el nombre de «póliza uniforme». Ya entonces existía un modelo especial del texto y condiciones que debían firmar los aseguradores, debiendo agregar que diversas leyes posteriores han aclarado y pulido los términos de estos contratos, los cuales — a simple título informativo — diré que se iniciaban con la invocación de: «In Nomine Dei, Amen».

Las disposiciones que dejamos referidas, demuestran que el Seguro debía ser practicado con bastante intensidad en el comercio de la metrópoli con sus colonias de América, y que de su aplicación surgía una experiencia que iba incorporándose al régimen legal de Indias.

Las cuestiones resueltas por diferentes leyes, debieron ser la consecuencia de casos prácticos ocurridos entonces en la contratación de Seguros, y de allí la importancia que traducen frente a la legislación contemporánea, que ha recogido con las variaciones consiguientes, aquellas mismas disposiciones, aclarándolas e incorporando su vigencia en nuestros Códigos.

Empero, estas disposiciones que fueron sucesivamente perfeccionadas, con particularidad en las Ordenanzas de Bilbao en 1725, como así también las contenidas en otros documentos anteriormente comentados, han constituido la base del progreso comercial de las colonias americanas, en todos sus aspectos, progreso que trajo involucrada la organización de empresas y sociedades de toda índole que extendieron sus actividades a las tierras de América.

Como se ve, varios siglos antes de nuestra emancipación existía en estas colonias la institución del Seguro, imperfectamente organizada si se quiere, pero con ordenanzas que delimitaban su posición en la sociedad, lo que indica por otra parte su gran boga y su importancia social como

un medio de previsión. De esta suerte se encontrará muy justificado que en Buenos Aires se gestionara ya, en 1796, la organización de la primera compañía colonial de seguros.

II

El resultado negativo de las investigaciones efectuadas para obtener otros documentos o detalles que arrojaran luz acerca de la práctica del seguro en la época colonial, excepción hecha de los documentos que contiene la legislación de Indias, nos obliga a llegar hasta el año 1794, a saber, a la época del Real Consulado de Buenos Aires, del cual fuera secretario el ilustre patricio D. Manuel Belgrano, gran economista, militar y gobernante, y a quien se debe la primera idea, el primer propósito de establecer en Buenos Aires una Compañía de Seguros Terrestres y Marítimos.

Algunos historiadores y comentaristas, entre ellos don Andrés Lamas, el Dr. Vicente Fidel López, D. Ricardo Pillado y el Dr. Andrés Llamazares, han afirmado coincidentemente que la primera iniciativa tendiente a organizar en el Río de la Plata una empresa de Seguros, partió del Primer Triunvirato, en 1811, a propuesta del señor Bernardino Rivadavia, habiéndose atribuido también la misma idea por otros autores al Dr. Juan José Paso, miembro del citado gobierno. Consideramos que la afirmación no es históricamente exacta y acerca de esta iniciativa he de ocuparme más adelante. Y queda dicho que no es exacta en virtud de los antecedentes a los cuales me referiré de inmediato, con lo que quedará aclarado un error histórico, y probado también que el primer eslabón, la primera idea esbozada concretamente, pertenece a don Manuel Belgrano, sin que pueda interpretarse esta apreciación como un propósito de restar méritos a la ilustre personalidad del señor Rivadavia.

En efecto: al recorrer los anales de la vida de Belgrano, que en páginas tan brillantes ha escrito el general don Bartolomé Mitre, se encuentran los fundamentos y testimo-

nios de mi afirmación, los cuales a su vez se hallan corroborados en documentos históricos, como las actas del Real Consulado de Buenos Aires (año 1796) y en la memoria titulada: «Medios Generales de Fomentar la Agricultura, Animar la Industria y Proteger el Comercio de un País Agricultor», leída por el licenciado don Manuel Belgrano, abogado de los Reales Consejos y Secretario por S. M. del Real Consulado de esta Capital, en la sesión que celebró la Junta de Gobierno a 15 de junio del presente de 1796». Este escrito — dice Mitre — que entonces era ya una especie de revelación, tendría hoy mismo su novedad y su aplicación práctica, hallándose todavía en estado de promesa muchos de los pensamientos que en él se contienen.

En esta Memoria, cuyo original manuscrito se conserva en el Museo Mitre, Belgrano formula todo un vasto plan de gobierno, ya que la redacción de la misma le fué encomendada por el Real Consulado, que más tarde ordenó su impresión para difundir las ideas económicas que ella contiene.

Estableciendo conceptos definidos y claros, don Manuel Belgrano se ocupa del comercio y se declara partidario entusiasta del libre cambio — tesis en favor de la cual ha trabajado como nadie en Sud América — y después de sostener la necesidad de dignificar los métodos comerciales, elevando el concepto y la misión de quienes lo ejercen, formula como conclusiones la necesidad de fundar una *Escuela de Comercio* y además que se establezca una *Compañía de Seguros Marítimos y Terrestres*.

He aquí una notable concepción cuya elocuencia es difícil de transcribir; Belgrano señala dos caminos para tener un comercio inteligente, culto y honesto: una escuela de comercio donde se enseñen las materias y tópicos afines a esta actividad y una compañía de seguros, que es el complemento indispensable para el comercio razonablemente organizado. Y así lo confirma Belgrano, cuando para explicar su pensamiento dice al Consulado:

«Otro de los medios de proteger al comercio es establecer una compañía de seguros, tanto para el comercio marítimo como para el terrestre; sus utilidades son bien conocidas, tanto a los aseguradores como a los asegurados, y deberían empeñarse en semejante compañía al principio, todos aquellos hombres pudientes de esta Capital y demás ciudades del Virreynato, a fin de que desde sus principios tuviesen grandes fondos, dispensándole este Cuerpo (el Consulado) toda protección posible».

Afirmaciones como estas, y otras referentes a explotaciones industriales del algodón, creación de una escuela de náutica, intensificación del cultivo del lino y del cáñamo y estímulos al perfeccionamiento de la agricultura, y finalmente los experimentos prácticos que él en persona realizó con el agrónomo Altolaquirre en los terrenos de la Recoleta, puntos estos que pasamos por alto por ser ajenos al estudio que nos ocupa, nos colocan frente a un hombre superior, de una clarividencia extraordinaria y dotado de condiciones bien excepcionales para la organización del futuro país, que debía surgir precisamente al impulso de la satisfacción imperiosa de sus necesidades económicas.

Belgrano esbozaba ya en 1796 la conveniencia y la necesidad de una Compañía de Seguros Terrestres y Marítimos, porque comprendía que una empresa de esta índole desempeñaba en el seno de las sociedades organizadas, una alta función de previsión social, que corre paralela al progreso de los pueblos. «Solamente un patriota de alma como Belgrano, divisó el programa de la futura nación, que debía surgir y desenvolverse por el impulso de las fuerzas vivas, de la producción, del intercambio, del mejoramiento industrial y de la educación pública».

Por ello presentó al Real Consulado esa iniciativa, que si no logró una realización inmediata, no fué precisamente por ser la idea demasiado prematura, ni por la imposibilidad práctica de substanciarla. Ha sido el interés privado que

ejerció una vez más su poderosa influencia, en una política económica tan desastrosa para la colectividad del Río de la Plata; ha sido la falta de conciencia con que era mirado el progreso social y económico de las tierras de América. Así lo explica el propio Belgrano al referirse a ésta y otras iniciativas que no lograron despertar el interés egoísta de los miembros del Consulado.

III

Aun cuando don Manuel Belgrano consigna en su autobiografía el juicio definitivo acerca de las variadas iniciativas que presentó al Real Consulado de Buenos Aires, hay que reconocer que las sabias enseñanzas que traducían sus esfuerzos, no cayeron en el vacío.

Así lo permite suponer la auspiciosa coincidencia, acerca de la cual informan y testifican, los valiosos documentos que constituyen el archivo de la correspondencia comercial de don Bernardo Gregorio de Las Heras, y que seguramente han de encontrarse también, entre los papeles de los más destacados comerciantes que actuaban en Buenos Aires durante la época que comentamos.

En efecto: a los dos meses escasos de haber presentado Belgrano al Consulado su iniciativa de propiciar la fundación de una Compañía de Seguros Marítimos y Terrestres, don Julián del Molino Torres, hombre de gran prestigio comercial, se propuso llevar a la práctica un propósito análogo, tendiente a crear una empresa de esta índole.

No ha sido posible constatar si Belgrano participó en esta empresa, ni si tuvo o no ingerencia en ella; pero lo cierto es, que a través de los documentos que sirven de base para esta conferencia, se observa una absoluta concordancia de ideas y conceptos, y hasta en la redacción de algunos párrafos, se traduce una admirable coincidencia.

Con el fin de realizar su iniciativa, el señor del Molino Torres dirigió una carta-circular a las personas de más reconocida solvencia, interesándolas en el asunto. Esta carta fué también dirigida a don Bernardo Gregorio de Las Heras, pues hemos hallado el original de la misma entre los documentos de su correspondencia comercial.

Con esta carta-invitación, se acompañaba un plan, el cual constituye un interesantísimo documento por la época en que fué esbozado, y con él se acompañó también un proyecto de reglas, es decir de estatutos, que debían regir la compañía proyectada.

Se inicia el esbozo del Plan, con la invocación del amor patriótico «que debe inflamar nuestros corazones, a fin de adelantar nuestros pasos hacia la felicidad». El señor del Molino Torres, consideraba que la organización de una Compañía de Seguros, conduciría a tal finalidad, la cual por otra parte debía substantiarse, «a lo menos en virtud de dos ventajosos e infalibles efectos: uno porque las crecidas sumas de Seguros que este vasto comercio incesantemente paga, y se ve en la necesidad de expatriar por no hallar otro recurso, acrecería los fondos públicos y será una sangre que vivificará más a la Patria; y el otro porque en cualquier caso de desgracia — léase siniestro — hallarían los asegurados un reintegro pronto y eficaz de todas las sumas que aseguren».

Es interesante destacar el concepto del artículo XVI de las citadas reglas. Dice así: «Como el carácter que ha de distinguir esta Compañía, ha de ser la buena fe con que ha de obrar, deberá otorgar sus pólizas de los seguros que hiciera, en términos claros y significativos, sin dejar lugar, a interpretaciones cavilosas, para que en ningún caso se haya de estar más que a su sentido literal: siendo su principal condición, que la Compañía ha de responder de la cosa que asegure, desde tierra, a tierra, por todos los riesgos vistos e imprevistos».

Con estas premisas que denotan un estudio serio del asunto, el señor del Molino Torres, con fecha 3 de noviembre de 1796, dirigió a las personas que se habían interesado en la empresa, una nueva carta-circular en la que les manifestaba, que «habiendo ya suficiente número de suscripciones para establecer la Compañía de Seguros de esta Capital, invitaba para celebrar la primera Junta de Accionistas, la que debía realizarse en la casa particular del Alcalde de segundo voto don Jaime Alsina».

Al dorso de la invitación que le fuera enviada a don Bernardo Gregorio de Las Heras, encontramos una anotación hecha de su puño y letra, en la que deja constancia que se suscribió a cuatro acciones; que la Compañía quedó constituida el 7 de noviembre y el nombre de las personas que integraron la Junta de Gobierno. También hay otras referencias, algunas difíciles de descifrar.

Quiere decir entonces, que la Compañía quedó así, definitivamente constituida, el 7 de noviembre de 1796, llamándosela «La Confianza». Constituyeron la Primera Junta de Gobierno las siguientes personas: D. Julián del Molino Torres; D. Casimiro Francisco de Necochea, D. Tomás Antonio Romero, D. Juan Antonio Lezica y D. Juan Ignacio Aguirre.

Con posterioridad participaron de la dirección de esta Compañía don Francisco Ignacio Ugarte, don Luis de Gardeazábal, D. Juan José Lezica y don Bernardo Gregorio de Las Heras.

Tal fué a grandes trazos la organización de la Primera Colonial de Seguros que se constituyó en Buenos Aires. Este primer ensayo asegurador tuvo indudablemente una importancia significativa y traduce un esfuerzo poco común en la época en que fué realizado.

Bien merece, pues, que al cabo de 138 años se recuerde este hecho, exhumando un acontecimiento quizá por muy pocas personas conocido y que con una singular satisfacción me es grato difundirlo con los documentos históricos que lo abonan.

IV

A esta Compañía «La Confianza», le siguió después la iniciativa que en 1811 tuvo don Bernardino Rivadavia, como secretario del Primer Triunvirato, remitiendo al Tribunal del Consulado un proyecto de creación de una compañía de seguros marítimos, iniciativa que no llegó a prosperar, ni fué hecha efectiva. Este propósito se desprende de un documento hallado por el señor Andrés Lamas, que declara haberlo copiado de un testimonio auténtico y lleva la fecha 21 de octubre de 1811, a saber, a un mes escaso de haber iniciado sus tareas el nuevo gobierno.

Este documento que señala una vasta comprensión y tiene todo el significado de un gran acto de gobierno, está constituido como dije, por una nota dirigida al Tribunal del Consulado en la que se formulan apreciaciones tendientes a señalar la conveniencia de «convocar a una junta de capitalistas nacionales y extranjeros que traten los medios de crear una compañía de seguros y una caja o Banco de Descuentos», con la advertencia de que dicha junta «no sea numerosa y sí compuesta de capitalistas escogidos a quienes sean familiares los asuntos que han de ventilar».

Este hecho que es de indudable valor por cierto, debe considerarse como la segunda iniciativa en materia de Seguros que surgió en el Río de la Plata, como así también entre una de las más avanzadas manifestaciones argentinas en materia de previsión social. De allí su importancia histórica, aun cuando no tuvo la fortuna de convertirse en realidad.

Por lo demás cabe añadir que el señor Rivadavia como secretario del Triunvirato y más tarde en 1826, cuando ejerció la presidencia de la República, llevó a cabo numerosas medidas de bien público y dió un impulso efectivo al comercio, a la industria y a la navegación, «que adquirieron

un inusitado grado de esplendor muy en desproporción de la chatura de los tiempos, no preparados para recibir el aporte de una vitalidad nueva, como lo era la que entrañaba la adopción de prácticas avanzadas en el juego normal de la economía del país». Pero con todo y por más que nos hemos empeñado en ello, no hemos podido obtener ningún dato que nos ilustrara acerca del establecimiento de alguna Compañía de Seguros durante la presidencia del señor Rivadavia, que bien pudo prestigiarla con mayores posibilidades de éxito, dada su alta posición. Verdad es también que los acontecimientos políticos ocurridos durante su gobierno, quizá le hayan restado el tiempo necesario para una iniciativa de esta índole.

Después de la iniciativa de 1811 y por falta de documentos que nos permitan encadenar los hechos posteriores, acerca del tema que venimos tratando, nos vemos obligados a llegar al año 1856, fecha en la cual el país inicia un desenvolvimiento más normal.

La época de Rosas no suministra ningún antecedente digno de mención; durante esos años las industrias y el comercio tuvieron un lento progreso, por momentos estacionario, sin poder recibir la influencia positivamente benéfica de las corrientes migratorias, que buscaban otros países más en consonancia, con sus deseos y aspiraciones, donde se asegurase la libertad individual y se obtuvieran las garantías emanadas del juego normal de las instituciones.

La tiranía, aun cuando fué un producto de la época, quizá necesaria, ya que la historia no ha pronunciado su última palabra todavía, retrasó indudablemente el progreso económico del país en muchos años, porque no sólo paralizó las actividades internas, sino que también impidió que nos llegaran de Europa los progresos modernos, que ya en ese entonces comenzaban a asombrar al mundo.

Pero la anormalidad que trajo aparejada el gobierno de don Juan Manuel de Rosas, cedió tan pronto como éste

sufriera el golpe decisivo del 3 de febrero de 1852, en que las fuerzas del general Urquiza obtuvieron el triunfo en los memorables campos de Caseros.

El país volvió entonces a una relativa normalidad. El volumen de las transacciones internas y las cifras del comercio exterior fueron acrecentándose de año en año y la vida institucional de la República adquirió paulatinamente la estabilidad de que hoy disfrutamos. Es el caso de recordar, sin embargo, a fin de hilvanar este acontecimiento, que a raíz del derrocamiento de Rosas, sobrevino la revolución del 11 de septiembre de 1853, que dió por resultado la separación de la provincia de Buenos Aires del resto de la Confederación, hasta 1860, época durante la cual fué sancionado el Código de Comercio por la legislatura de Buenos Aires, que para la materia que venimos estudiando tiene una singular importancia.

El desarrollo de las industrias, paralizado hasta aquel momento, se acentuó con sorprendente intensidad, de manera que permitió al Seguro iniciarse dentro de un marco más propicio del que había tenido hasta la fecha.

Han desaparecido los elementos fehacientes que nos permitan referirnos a la existencia de sociedades o compañías expresamente radicadas en el país; pero sobre lo que no cabe la menor duda, es acerca de la existencia de agentes o representantes de entidades extranjeras que explotaban ese comercio entre nosotros. Porque es inadmisibile que tantos cargamentos que llegaban al Río de la Plata no estuviesen a cubierto de los riesgos emergentes de las travesías, harto difíciles en aquellos tiempos. Esta deducción, muy lógica por otra parte, robustece nuestra creencia y nos afirma en el principio de que el Seguro era practicado en el país antes de que revistiese la forma actual.

Además existen dos circunstancias especiales que corroboran este temperamento. La primera consiste en el hecho que, al sancionarse el Código de Comercio en 1859, se legislara con tanta amplitud sobre el comercio de Seguros,

asunto acerca del cual conviene señalar su importancia. La segunda es el dictamen del Dr. Eduardo Costa, Fiscal de Estado que en 1860, al evacuar su informe en el pedido de autorización legal de la primera compañía nacional de seguros, dice: «Ella ha venido a llenar una necesidad sentida en el país; y es de esperarse de la moralidad de su administración y de la respetabilidad de las personas que están a su frente, llegará a un alto grado en el desenvolvimiento de sus operaciones y dejará al Estado una parte considerable de las utilidades que hoy realizan las compañías extranjeras».

Esta última aseveración denuncia la existencia de agentes de las compañías extranjeras, los que debían operar sin ninguna autorización legal o en forma tal, que los pudiese a cubierto de alguna fiscalización, a fin de obtener la máxima utilidad de sus negocios.

Como hemos visto, desde la iniciativa de 1811, hasta el establecimiento de la primera compañía argentina de Seguros en 1860, existe un lapso de tiempo en que la falta de elementos de juicio, no nos permite hacer apreciaciones precisas sobre el incremento de esa actividad en el país. Pero, no obstante ello, creemos haber suplido esas deficiencias con apreciaciones individuales, no desprovistas de fundamentos históricos.

Así las cosas, llegamos hasta la época preconstitucional de la República, fecha en que la industria aseguradora, ya definitivamente incorporada a las actividades del país, permite seguir paso a paso todos sus movimientos.

V

La primera manifestación habida después de iniciado el período de normalidad, y en cuanto a entidades aseguradoras se refiere, corresponde a la sociedad The Northern Assurance Company Ltd., la cual estableció en el país su primera representación en el año 1856.

Esta importante sociedad de seguros había iniciado sus operaciones en Londres, veinte años antes de esa fecha, o sea en el año 1836, logrando un rápido arraigo que le permitió a los pocos años extender sus negocios al exterior de Inglaterra.

La Argentina fué una de sus primeras experiencias en ese sentido y de allí que confiara su representación a los señores John Eastman y Cía., que por aquellos años se habían radicado en el país.

En el mismo año 1856 se estableció en Buenos Aires una representación de la compañía de seguros titulada «La Española», con sede principal en Madrid, cuyos negocios estuvieron a cargo de los señores Enrique Ochoa y Cía. De las memorias y antecedentes de esta entidad se desprende que debió operar hasta el año 1859, cesando después en el ramo de seguros que tenía adicionado a otras actividades. Nos sugiere esta afirmación la circunstancia de que los señores Ochoa y Cía. figuran entre los accionistas fundadores de la «Primera Compañía Argentina de Seguros Marítimos».

La sanción del Código de Comercio, como se dijo, contribuyó, a iniciar lo que con propiedad podría llamarse Seguro Argentino. A pesar de no existir ninguna compañía o sociedad de Seguros, el nuevo Código contenía una inteligente legislación sobre la materia y fué este hecho sin duda, el que movió a un distinguido hombre de negocios, D. Francisco F. Moreno, para fundar la primera entidad que bajo la forma de capital anónimo se denominó «Primera Compañía Argentina de Seguros Marítimos», autorizada el 10 de octubre de 1860 por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que presidía entonces el general don Bartolomé Mitre.

Las más acreditadas firmas del comercio nacional figuraron como primeros accionistas de la nueva Compañía, a las que se unieron las de algunos otros capitalistas particu-

lares extranjeros, lo que determinó que desde los primeros momentos la empresa pudiera contar con positivos recursos.

Esta primera entidad nacional de seguros desarrolló sus negocios con toda felicidad, no obstante las dificultades y deficiencias naturales de la época.

Hecho este primer ensayo, que tuvo también algunas alternativas difíciles, al cabo de 18 años de existencia y debido a los infundados temores de algunos accionistas, ante la situación de crisis general que entonces se sentía, obligaron a hacer la liquidación de aquella primera entidad nacional aseguradora; pero esto sólo se llevó a cabo, cuando ya se tenían realizados todos los trabajos preparatorios y era un hecho a plazo inmediato, la fundación de la compañía sucesora que lo fué «La Segunda Argentina». Esta compañía subsiste aún hoy, habiendo sustituido su antigua denominación por la de: Compañía de Seguros «La Estrella».

Desde entonces se inicia sucesivamente una serie de fundaciones, más o menos felices; las compañías aseguradoras extranjeras — inglesas con particularidad — se incorporan en número interesante al seguro nacional; el fisco hace sus primeras incursiones impositivas y las disposiciones reglamentarias se suceden en forma desarticulada e inconexa; la jurisprudencia judicial inicia sus fallos, con lo que fija orientaciones y da normas de interpretación en el orden legal.

La crisis económicas de 1875 y de 1890, hacen sentir los escozores de su influencia dentro del campo asegurador, motivo este que hace ralear el número de aseguradores, fenómeno que se está repitiendo con igual similitud en la crisis actual.

El mercado de seguros se expande y adquiere paulatinamente proporciones interesantes, a medida que el país señala progresos de consideración. El capital extranjero representado por mayor número de empresas y con más

caudal de experiencia, acapara por completo el seguro argentino, provocando este hecho una reacción que llama la atención de los poderes públicos. La política fiscal de la Nación, estimula entonces al capital argentino, que reacciona con decisión y gran espíritu, logrando nivelar situaciones frente al capital extranjero, a principios del siglo actual, hasta llegar desde hace unos 20 años a una superioridad notable, posición que hoy mantiene con grandes ventajas para la economía pública y privada.



G O T A R D O P E D E M O N T E